



NUE 2-D-2020 (CE)

contra

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las diez horas veinte minutos del tres de febrero de dos mil veintiuno.

Descripción del caso:

El 16 de enero del 2020, [REDACTED] presentó escrito de denuncia en contra del servidor público: **Ciro Antonio Barrera Solórzano**, quien se desempeñaba como oficial de información de la **Policía Nacional Civil (PNC)**, por la presunta comisión de la infracción muy grave letra "a" del art. 76 de la Ley de Acceso a la Información Pública -LAIP-, consistente en: *"Actuar con negligencia en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados conforme a esta ley"*, y por la infracción leve letra "e" consistente en *"no proporcionar la información en el plazo fijado por esta ley"*

En ese orden, según lo expuesto por la denunciante en su escrito, los hechos en que fundamenta su acusación contra el denunciado se derivan del trámite seguido a una solicitud de información presentada el día 11 de noviembre del año 2019 en la Unidad de Información de la **PNC**, en la que solicitó la siguiente información:

"1. Número de personas que, teniendo medidas de prisión preventiva o detención administrativa, fallecieron en las bartolinas de esa Institución durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 al 31 de octubre de 2019. Esta información debe estar desagregada por: causa de muerte, género, delito que se le atribuyó, nombre de la delegación o subdelegación en la que se encontraba, departamento, mes y año; y 2. Número de personas que, teniendo sentencia condenatoria o que por razones de hacinamiento carcelario tuvieron que permanecer en bartolinas, fallecieron en esos recintos. La información que se requiere es dentro del periodo comprendido del 1 de enero de 2014 al 31



de octubre de 2019, desagregada por: causa de muerte, género, delito por el que se condenó, nombre de la delegación o subdelegación en la que se encontraba, departamento, mes y año”.

Al respecto, la denunciante, manifestó que en fecha 15 de noviembre de 2019 le fue notificada de la admisión de la referida solicitud y establecieron como fecha probable de respuesta el 28 de noviembre de 2019, y que llegada a la fecha prevista, no hubo entrega de la información, en virtud de lo cual realizó dos llamadas por teléfono a la referida UAIP, y fue transferida con la persona asignada al caso, quien le hizo saber que ampliaría el plazo para la entrega de la información, pero que hasta dicha fecha no le habían notificado la resolución motivada al respecto.

La denunciante manifestó que considera que existe una negligencia reiterada de tramitar debidamente su solicitud de información, situación que ha impedido que se le garantice su derecho fundamental de acceso a la información pública, respaldado por el art. 18 y 6 de la Constitución de la República, así como en los Arts. 1, 2, 29 y 66 de la LAIP; y, por tanto, interpuso denuncia contra el **Ex Oficial de Información de la PNC**, comisionado **Ciro Antonio Barrera Solórzano**.

En esa línea, [REDACTED] solicitó el inicio de un procedimiento sancionatorio en contra del servidor de la unidad administrativa de la PNC a quien se le requirió la información, por la presunta comisión de la infracción muy grave letra “a” del art. 76 de la LAIP, consistente en: *“actuar con negligencia en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados conforme a esta ley”*, y por la infracción leve letra “c” consistente en “no proporcionar la información en el plazo fijado por esta ley”. Y de la infracción leve tipificada en el art. 76 literal “c” de la LAIP consistente en: *“no proporcionar información en el plazo fijado por esta ley”*. En ese sentido se procedió a designar a la Comisionada **Claudia Liduvina Escobar Campos**, como instructora de la causa.

Sobre el particular es necesario mencionar que la proposición efectuada por la Comisionada Instructora, fue distinta a la resolución definitiva que hoy se emite. La propuesta evocada implicaba la imposición de la sanción establecida en el artículo 77 letra b. de la LAIP, atendiendo a los criterios de la dosimetría punitiva en razón del principio de proporcionalidad. Debido a que, a su juicio, se comprobó existencia de negligencia en el

ejercicio del cargo de oficial de información de la PNC, en el trámite de la solicitud de información presentada por la ciudadana Hernández Castro.

La Comisionada Instructora, además, manifestó que la reiterada negligencia advertida se puso en evidencia ante la falta de cumplimiento a las obligaciones legalmente previstas para todo oficial de información, de acuerdo al artículo 50 letras “d”, “g”, “h”, “i” de la LAIP, lo cual, incluíblemente, a su juicio, provocó una afectación a la naturaleza del Derecho de Acceso a la Información Pública, de acuerdo al artículo 2 de la LAIP. Además considera que la pretensión de la denunciante es que se proceda a la instauración de un precedente por parte de este Instituto, que conlleve a los servidores públicos a dotar de la relevancia que merece este Derecho, por lo que, considera, es irrelevante para este caso la evocación de otros mecanismos alternos a un procedimiento sancionador.

Ahora bien, en plena observancia y respeto al derecho de defensa que debe imperar en todo procedimiento, de conformidad con el artículo 88 de la LAIP, se corrió traslado al denunciado **Ciro Antonio Barrera**

Solórzano, ex Oficial de Información de la **Policía Nacional Civil** para que rindiera su informe de defensa.

En fecha 29 de enero del 2020, **Ciro Antonio Barrera Solórzano**, remitió a través de correo electrónico su informe de defensa respecto la conducta preliminarmente atribuida por este Instituto, manifestando, en síntesis, que; i) la institución encargada de realizar las investigaciones de los delitos es la FGR y que la PNC únicamente apoya a la precitada; ii) que la ley habilita para prorrogar la entrega de la información hasta por 15 días adicionales, y que él mismo hizo uso de las referidas prórrogas; iii) que cuando se trató de enviar la información a la denunciada recibió un mensaje de error, en virtud de fallas de red que los servidores institucionales de la PNC, estaban experimentando.

La audiencia oral, se desarrolló a través de la plataforma de “google meet”, en aplicación de lo establecido en los artículos 3 letra “g” de la LAIP y 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA). En la misma compareció el indiciado en el presente, **Ciro Antonio Barrera Solórzano**, ex Oficial de Información de la **Policía Nacional Civil**, actuando en su carácter personal.



Durante la tramitación de la referida audiencia el pleno de comisionadas y comisionados, confirió la oportunidad de plantear cuestiones incidentales, el indiciado **Barrera Solórzano**, manifestó no estar de acuerdo con la transmisión y grabación de la audiencia, al respecto, por mayoría del pleno se resolvió declarar no ha lugar a la solicitud incidental planteada por el ex oficial de información, así mismo se dio la oportunidad al indiciado de aceptar los hechos atribuidos como infracción, con motivo de proporcionar los beneficios regulados en el artículo 156 de la LPA, en caso de determinar la existencia de conductas constitutivas de infracción, con base al principio de proporcionalidad; sin embargo, el indiciado manifestó no aceptar tal proposición.

En la misma, a efectos de delimitar el objeto probatorio el pleno de Comisionadas y Comisionados, se pronunció admitiendo la prueba ofrecida por el indiciado, en relación a la prueba testimonial ofrecida, en la cual desistió de la proposición del testigo [REDACTED] y se propuso a [REDACTED] Previa deliberación se admitió únicamente como testigo a la señorita [REDACTED] en cuanto al ofrecimiento del comisionado **Edwin Rafael Flores Quintanilla**, se consideró por el pleno que acuerdo a la delimitación realizada que no existían elementos de utilidad e idoneidad para proceder a su incorporación al procedimiento de acuerdo al artículo 319 del Código Procesal Civil y Mercantil.

En ese sentido, se procedió al desfile probatorio, iniciando con la testigo presentada por el indiciado, la testigo [REDACTED] fue juramentada de conformidad a lo establecido en el art. 305 del Código Penal, advirtiéndole la obligación de decir la verdad. Posteriormente se concedió la palabra al señor **Barrera Solórzano**, a efecto de que realizará el interrogatorio directo de la testigo ofrecida. Al respecto, la testigo, en síntesis, manifestó que: recibió la solicitud el día 11 de noviembre de 2019, y que el requerimiento realizado por la denunciante era complejo. A raíz de las interrogantes planteadas por la denunciante, la testigo manifestó que su cargo en la institución es de colaboradora de la UAIP, que todas las solicitudes de información le son asignadas por su jefatura, que la solicitud presentada por la denunciante le fue asignada, en fecha 11 de noviembre de 2019, también explicó que su función es darle trámite a las solicitudes de acceso a la información que se presenten en la unidad, consistentes en la realización análisis de la información solicitada, posteriormente se da recepción a la parte solicitante y que después se hace el trámite con las unidades que resguardan, generan o administran la información y cuando estas envían la información, se

elabora una resolución final con dicha respuesta formulada por la unidad generadora, manifestó que son los colaboradores quienes elaboran las resoluciones, se las envían al oficial de información y él es quien las firma, que ella había sido la que formuló la resolución de admisión de la solicitud, y que la posible fecha de entrega de información consignada en la resolución era el 28 de noviembre. En cuanto al trámite que dio lugar el presente, manifestó, que la elaboración de la resolución de ampliación del plazo para la entrega de la información se realizó el día el 27 de noviembre, misma fecha en la que se notificó de la resolución a la denunciante, y que pasó la misma al ex oficial de información en esa misma fecha y que la recibió firmada en fecha 28 de noviembre, y que se realizó una llamada a la solicitante para informar que habría una ampliación en el plazo en virtud de que la información excede de cinco años, declaró que las notificaciones se realizan desde el correo electrónico institucional, además informó que en la fecha en la que pretendió enviar la resolución correspondiente, hubo una falla de red que duró mucho tiempo y que por eso la ampliación se notificó a través de una llamada telefónica. Finalmente, la denunciante preguntó cuál había sido la fecha en la que se elaboró la resolución final, cuándo la pasó a firma del oficial de información y si dicha resolución obraba en el expediente administrativo, a lo que la misma indicó que ambas actuaciones fueron realizadas en fecha once de diciembre de dos mil diecinueve y que sí la misma estaba dentro del expediente administrativo.

La citada audiencia finalizó en la etapa de los alegatos, y preguntas aclaratorias por parte de las comisionadas y comisionado que se encontraban formando pleno, a lo que la Comisionada Cortez Estévez, pidió al indiciado que delimitara el tiempo que duró la falla de red invocada, a la cual hizo referencia la testigo, a lo que el ex oficial de información respondió, que los problemas técnicos llegaron incluso al mes de enero del 2020, así mismo preguntó a la denunciante, si se le fue notificada de la ampliación del plazo y la motivación respecto de la misma, a lo que la denunciante respondió, que ella llamó a la UAIP de la PNC y que allí se dio cuenta de la aludida ampliación del plazo.

Análisis del caso.

Una vez establecido lo anterior, el orden lógico con el que se estructura esta resolución será el siguiente: **I.** En primer lugar, se hará referencia a la potestad sancionatoria del Estado y del principio de legalidad, como principios que rigen el ejercicio de dicha facultad por parte de este Instituto; **II.** Posteriormente, se expondrán breves consideraciones



sobre la infracción grave consistente en “*Actuar con negligencia en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados conforme a esta ley.*” y la leve, consistente en: “*No proporcionar la información en el plazo fijado por esta ley*”; III. Se analizarán los medios de prueba admitidos en el presente procedimiento; IV. Análisis de la infracción cometida a la luz de los principios del derecho sancionador.

I. La potestad sancionadora del Estado, conocida como *ius puniendi*, y concebida como la capacidad estatal de ejercer un control social coercitivo sobre actos ilícitos, se manifiesta en la aplicación de las leyes por los tribunales en el ejercicio de su función jurisdiccional, y en la actuación de la Administración Pública al imponer sanciones a las conductas calificadas como infracciones por el ordenamiento jurídico. Esta materialización del *ius puniendi* en el campo administrativo se denomina potestad sancionadora de la Administración.

La principal justificación de la potestad sancionadora, ejercida por entes administrativos, atiende a razones pragmáticas, pues es necesaria la imposición de medidas represivas por parte de la administración pública para restablecer el orden jurídico que ha sido alterado por conductas que le contravienen de forma directa, y así desplegar su función principal consistente en gestionar los bienes, recursos y servicios estatales, mediante actividades encaminadas a la realización del bien común y del interés colectivo. (Sentencias del 29 de abril de 2013 tramitada bajo la referencia Inc. 18-2008 y del 7 de enero de 2019 tramitada bajo la Inc.21-2018)) ya que es la estructura orgánica compuesta por diversas instituciones a la que se atribuye la función de gestionar los bienes, recursos y servicios estatales, mediante actividades encaminadas a la realización del bien común y del interés colectivo (sentencia de 29 de abril de 2013 tramitado bajo la referencia Inc. 18-2008). Para la consecución de tal finalidad, la administración puede ejercitar potestades determinadas, entre las que se encuentra la potestad para sancionar conductas contrarias al ordenamiento jurídico. (Resolución de la SCA emitida en fecha 7 de enero de 2009 tramitado bajo la referencia 21-2018)

Asimismo, la actividad de los administrados es controlada y seguida por la Administración Pública, por medio de técnicas permitidas, justificadas por la posibilidad de tutelar los intereses sociales, de ahí que pueda imponer sanciones administrativas, puniendo actitudes lesivas —acciones u omisiones— a la esfera jurídica de los administrados.

Es dable resaltar el efecto disuasivo que la sanción, al igual que la pena en el ámbito penal, trae aparejada para el infractor de una norma. En ese sentido, a través de la corrección de conductas al margen de la ley —que pueden ocasionar consecuencias perniciosas a los receptores de esta— se pretende reorientar actitudes que desde un inicio se perfilaban arbitrarias, a caminos iluminados por la legalidad, como el restablecimiento de la seguridad jurídica (Resolución definitiva emitida por este Instituto el 23 de enero de 2019 ref. 13-D-2018).

Así, sobre la base del artículo 14 de la Constitución con relación al 58 letra “e” de la LAIP, este Instituto puede intervenir punitivamente en la esfera jurídica de los servidores públicos que provoquen una lesión o daño a los derechos que garantiza la mencionada ley, considerados estos como derechos fundamentales de los administrados, siempre que tales comportamientos se encuentren tipificados en el referido cuerpo normativo como infracciones plausibles acreedoras de una sanción de carácter pecuniario.

Dentro de esta potestad administrativa sancionadora, se encuentran fijados fines y principios que deben regir la valoración de los hechos e interpretación de las normas. Entre estos principios se encuentran: el principio de legalidad, lesividad del bien jurídico, culpabilidad y la prohibición de doble juzgamiento, que en doctrina se han denominado como el programa penal de la Constitución.

(i) La jurisprudencia constitucional de nuestro país, entendida como fuente de derecho, establece que el principio de legalidad en el ámbito sancionador, constituye una exigencia de seguridad jurídica que no sólo requiere el conocimiento previo de los delitos o infracciones y de las penas o sanciones, sino que también constituye una garantía política hacia el individuo de que no puede ser sometido a penas o sanciones que no hayan sido establecidas previamente, evitando así los abusos de poder. (Resolución emitida el 15 de julio de 2004 por la SC, en el proceso de amparo de referencia 117-2003).

Es así, que el mencionado principio trae aparejadas implicaciones para la interpretación y aplicación de la LAIP, en el sentido que establece condiciones para la imposición de sanciones por infracciones a la ley, tales como: i) que una ley describa la infracción y su punición; ii) que la ley sea anterior al hecho; iii) que la ley sea precisa en su lenguaje descriptivo con relación a la construcción de la infracción y precisa en el lenguaje



normativo de las consecuencias que resulten de su cometimiento; y, iv) que se evite comprender supuestos que no se enmarquen dentro de su tenor.

II. En el artículo 76 de la LAIP el legislador prevé los tipos de infracciones que podrían ser cometidas por los funcionarios o servidores públicos, al quebrantar las disposiciones relativas al derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales, en el ejercicio de sus funciones; y, a la vez, categoriza dichas infracciones en leves, graves y muy graves. Esta clasificación ha sido determinada por el legislador atendiendo la graduación del daño provocado o la puesta en peligro de bienes jurídicos protegidos por la LAIP como consecuencia de la comisión de conductas tipificadas en la citada disposición legal.

En consonancia con lo anterior, la LAIP en el artículo 58 letra “e” confiere expresamente, a este Instituto, la potestad de *“conocer y resolver del procedimiento administrativo sancionatorio y dictar sanciones administrativas”*.

En el presente procedimiento se señaló de forma preliminar el cometimiento de la infracción dispuesta en el artículo 76 letra “a” de las infracciones graves de la LAIP, consistente en *“actuar con negligencia en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados conforme a esta Ley.”* y la infracción leve contemplada en la letra “c” del apartado de las infracciones leves, del art. 76 de la LAIP consistente en: *“No proporcionar la información en el plazo fijado por esta Ley”*.

De las disposiciones citadas se extrae, que los sujetos activos de estos tipos, *prima facie*, son los oficiales de información, en el desempeño de las atribuciones, conferidas en el artículo 50 de la LAIP, que devienen en el cometimiento de esta infracción por darle trámite de forma desprolija a la solicitudes de información que realice la ciudadanía a la institución en la que laboren, o bien, por actuar de forma negligente en la publicación de información oficiosa que prescriben los artículos del 10 al 17 de la LAIP y los dos lineamientos para la publicación de información oficiosa, que brindan especificaciones sobre las características que debe de presentar la información que se pretenda difundir por las instituciones v.g. que la información se actualice en periodos concretos, que la misma se encuentre en formato procesable, que la misma se publique de forma completa.

Ahora bien, en cuanto a la infracción consistente en no entregar la información en el plazo fijado por la ley se encuentra en sintonía con la relevancia del principio de prontitud previsto en el artículo 4 letra c de la LAIP. También es necesario hacer ver, que para el caso concreto, la dilación de la entrega de la información, se debió a la negligencia en el trámite de la solicitud de información por parte del ex oficial de información.

La relevancia de estas conductas, que pueden suscitarse de actuaciones específicas u omisiones, estriba en que a través de ellas se veta del conocimiento general la información generada por la institución pública configurándose así una vulneración al derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía, lo cual riñe con un estado democrático de derecho.

Ahora bien, el presente procedimiento de oficio se inició en contra del ex oficial de información de la UAIP por advertir preliminarmente, el cometimiento de la infracción del artículo 76 letra "a" del apartado de las infracciones graves de la LAIP. En ese sentido es necesario realizar el análisis correspondiente para determinación del cometimiento de la infracción señalada preliminarmente.

III. Los insumos probatorios que obran en este procedimiento administrativo sancionador, se constituyen como prueba documental y testimonial, reconocida por el Código Procesal Civil y Mercantil, que regula lo referido al ámbito probatorio en los procedimientos que tramita la Administración Pública, de acuerdo al artículo 106 de la LPA. En ese sentido, en relación a los instrumentos propuestos debe de tomarse en cuenta que a la fecha no se ha procedido a la impugnación de autenticidad de los mismos. En consecuencia, la valoración de los elementos que se enuncian a continuación deberá realizarse bajo las reglas establecidas en la sección primera del capítulo IV, del CPCM. Los mismos se enuncian a continuación:

A. La denunciante incorporó como prueba, la solicitud de información presentada y las resoluciones emitidas por la UAIP de la PNC; no obstante, las mismas se encuentran contenidas en el expediente administrativo remitido por la PNC.

B. El Comisionado **Barrera Solórzano**, por su parte, agregó el expediente administrativo de la solicitud de información efectuada por la ciudadana [REDACTED] y el testimonio de la empleada pública [REDACTED]



Ahora bien, con base a los elementos de prueba presentados, valorados conforme el artículo 416 del CPCM, se tienen por establecidos los siguientes hechos:

- a) Que la ciudadana [REDACTED] presentó solicitud de información ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Policía Nacional Civil el día 11 de noviembre de 2019;
- b) Que la solicitud de información interpuesta por la denunciante, fue admitida a través de resolución de las quince horas del día quince de noviembre de dos mil diecinueve, la cual fue notificada a través de forma electrónica a la solicitante.
- c) Que, en el auto de admisión, el ex oficial de información, consignó como fecha probable de respuesta el 28 de noviembre de 2019.
- d) Que en fecha 28 de noviembre de 2019, no se efectuó la entrega de la información requerida por la licenciada [REDACTED] debido a que la unidad administrativa encargada de generar la información solicitó una prórroga para ello.
- e) Que la prórroga aludida fue comunicada por la colaboradora asignada de la UAIP de la PNC a la solicitante, por medio de llamada telefónica.
- f) Que dentro del expediente administrativo no obra resolución de prórroga alguna formulada por la UAIP a efecto de comunicar el requerimiento de la unidad generadora.
- g) Que en fecha 11 de diciembre del 2019, se emitió resolución final por parte de la UAIP de la PNC a través de la cual se deniega el acceso a la información pública.

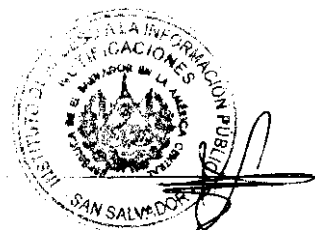
IV. Ahora bien, en atención a la denominada “*vertiente material del principio de legalidad o principio de tipicidad*”, corresponde determinar con base a los hechos probados señalados anteriormente, si **Ciro Antonio Barrera Solórzano**, ex oficial de información de la Policía Nacional Civil, cometió las infracciones clasificadas como: a) grave contenida en el artículo 76 letra “a” de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), consistente en: “*actuar con negligencia en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados conforme a esta ley* y la b) leve prevista en la letra c) del art. 76 de la LAIP consistente en “*No proporcionar la información en el plazo fijado por esta ley*”.

De lo anterior se advierte que si ha existido un incumplimiento a lo establecido en el artículo 50 letra "a" de la LAIP. Sin embargo, en aplicación a los principios enunciados de forma previa más allá de los resultados, es decir, el cometimiento de una infracción, es necesario traer a colación que los principios del Derecho Penal se extrapolan al Derecho Administrativo Sancionador, ya que ambos devienen del *Ius Puniendi* del Estado. Es por ello que este Instituto considera imperante hacer las siguientes precisiones:

Conforme al principio de legalidad, las competencias que tiene este Instituto, de conformidad a las atribuciones otorgadas en la LAIP, a fin de establecer el marco de actuación bajo el cual se desarrollan sus funciones no jurisdiccionales -siempre de naturaleza administrativa-. Es así, que este instituto tiene la competencia para tramitar, en principio, tres diferentes procedimientos, a saber: el recurso de apelación, falta de respuesta y procedimientos administrativos sancionadores (artículos 75, 82 y 89 de la LAIP), a los cuales se le da trámite de acuerdo a la legislación aplicable.

Respecto al recurso de apelación, podemos apuntar que el art. 82 de la LAIP, habilita la interposición del mismo a petición de parte, siempre que haya sido notificado de una resolución que niegue el acceso a la información, afirme la inexistencia de la misma o incurra en cualquiera de las causales enunciadas en el art. 83 de la LAIP. Es así, que su finalidad es atacar el fondo de la resolución emitida por un oficial de información entorno a una solicitud de información, pudiendo este Instituto: desestimar el recurso por improcedente o sobreseerlo, confirmar la decisión del oficial de información, confirmar la inexistencia de la información requerida, revocar o modificar la decisión del citado oficial de información (art. 96 de la LAIP)

En lo atinente al procedimiento por falta de respuesta, es importante señalar que debido a su naturaleza implica una tramitación sumaria, de acuerdo a lo establecido en el art. 75 de la LAIP. El mismo se ha establecido para que, ante la falta de respuesta a una solicitud de información planteada, en el plazo establecido por la ley (art. 71 LAIP), la ciudadanía acuda ante este Instituto, dentro de los quince días hábiles siguientes a la finalización del plazo para dar respuesta, para que este determine si la información solicitada es pública o no, en un plazo de diez días hábiles y proceda a ordenar la entrega la información solicitada, si este determina la naturaleza de pública de la misma.



Ahora bien, el artículo 75 de la LAIP establece que de cerciorarse que hay indicios de una conducta infractora, iniciará el procedimiento correspondiente, en caso contrario, ahí finaliza su tramitación.

Finalmente, este Instituto, como autoridad administrativa, se encuentra habilitada para tramitar procedimientos administrativos sancionadores, así lo ha reconocido la Constitución en su artículo 14 y el artículo 58 de la letra “e” de la LAIP. Ello en atención a la potestad sancionadora del Estado, concebida como la capacidad estatal de ejercer un control social coercitivo sobre actos ilícitos, en los términos previstos en el romano I de esta resolución.

Ahora bien, en términos concretos, en relación a la invocación realizada de los principios del Derecho Penal, la Sala de lo Contencioso Administrativo se ha pronunciado en reiteradas ocasiones habilitando la citada extrapolación de una disciplina a la otra, concretamente ha establecido: *“(…) Resulta pues, que la potestad sancionadora de la Administración se enmarca en principios correspondientes a los que rigen en materia penal, pero con las particularidades o matices propios de la actividad realizada por la Administración. Sabido es que existen distinciones importantes entre la actividad penal y la actividad administrativa, en razón de las distintas funciones que cumplen en un Estado de Derecho, aunque ello no debe inhibir a la Administración de la aplicación de los principios rectores del ius puniendi al ámbito administrativo sancionador, pues estos tienen origen —primordialmente— en la Carta Magna. Se afirma sin ambages, que en el ordenamiento administrativo sancionador salvadoreño resultan aplicables los principios que rigen en materia penal encauzando la actuación sancionadora en beneficio del cumplimiento de los fines del Estado y en garantía de los derechos de los administrados”*. (Sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo bajo la referencia 11-2010, de las ocho horas y cincuenta y cuatro minutos del trece de febrero de dos mil catorce.)

Actualmente esta aseveración encuentra asidero legal en el artículo 139 de la LPA, bajo el título de *“principios de la potestad sancionadora”*, teniendo en cuenta que la aludida disposición no es taxativa, sino que debe de atenderse para fines ilustrativos. Es así que con base a la jurisprudencia contenciosa administrativa y a la legislación aplicable se procede a la aplicación de los principios del Derecho Penal al Derecho Administrativo Sancionador.

Habiendo establecido lo anterior, teniendo en cuenta la naturaleza de este Instituto y sobre la base del principio de mínima intervención del Estado o *“última ratio”* -desarrollado

realización de la notificación de la prórroga para entrega de la información solicitada por la ciudadana [REDACTED] lo cual provocó que la resolución final del requerimiento realizado a la PNC, no fuera entrega en tiempo.

Ahora bien, en aplicación a los argumentos vertidos previamente, este Instituto considera que lo conducente, en principio era incoar un procedimiento administrativo por falta de respuesta, en atención al artículo 75 de la LAIP, en los términos establecidos de forma previa en esta resolución y así obtener una efectiva tutela de derechos a través de un eventual pronunciamiento de este Instituto ordenando la entrega de la información requerida, o en todo caso Con ello se verifica que existía otra forma, menos gravosa, para garantizar el DAIP del denunciante, esto es la solicitud de falta de respuesta. Unido a ello, también el artículo 83 letra c de la LAIP establece que otro motivo para recurrir ante el Instituto es que *“el solicitante no esté conforme con el tiempo, el costo o la modalidad de entrega”*.

Dicho ello, es importante aclarar que este Instituto no consiente la conducta señalada por el denunciante respecto al ex oficial de información de la UAIP de la PNC y en ese sentido exhorta a los servidores públicos obligados a la LAIP, a que ejerzan sus funciones a la luz de los principios de juridicidad, que rige todo Estado de Derecho; de prontitud, sencillez previstos en el artículo 4 de la LAIP, y los de legalidad, celeridad e impulso de oficio previstos en el artículo 3 de la LPA; sin embargo, tal como reiteradamente se ha indicado, también se encuentra supeditado a los principios que rigen el Derecho Punitivo. En ese sentido y verificando la existencia de alternativas menos gravosa a un procedimiento sancionador, este Instituto sobre el fundamento del principio de mínima intervención del Estado, considera que no es posible atribuir responsabilidad al ex oficial de información de la UAIP de la PNC en virtud de la narración fáctica realizada por la impetrante.

V. Por tanto, con base a las razones anteriormente expuestas y disposiciones citadas, además de los artículos 6 y 18 de la Constitución de la República, este Instituto **resuelve:**

- a) **Absolver a Ciro Antonio Barrera Solórzano**, por las razones señaladas.
- b) **Publíquese** esta resolución, oportunamente.
- c) **Hacer saber** a la denunciante que contra este acto administrativo solo cabe el recurso de reconsideración, no siendo necesario agotar la vía administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

d) Archivar definitivamente este expediente una vez esta resolución adquiera estado de firmeza.

Notifíquese.

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a stylized 'A' with a horizontal line through it. The middle signature is a cursive 'J' followed by a vertical line. The third signature on the right is a more complex cursive signature, possibly 'J. Hernández'.

PRONUNCIADA POR LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN. -

AA/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los once días del mes de febrero de dos mil veintiuno.

José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
TATE

